

Centros Cívicos por la Paz

Infraestructura comunitaria para la prevención de la violencia y el delito

Autor: Matilde Elton, Rolando Carmona, Catalina Droppelmann, Pablo Carvacho.

Fecha: julio 2024.

IDEAS CLAVE

- La criminalidad en Chile se ha vuelto más compleja y violenta, con un aumento de delitos graves y organizados. Estos crímenes están concentrados en áreas críticas, caracterizadas por la segregación urbana, falta de presencia estatal e infraestructura, lo que destaca la urgencia de enfocar las intervenciones en estos barrios más afectados.
- La violencia barrial afecta profundamente a la juventud, incrementando el riesgo de involucrarse en comportamientos delictivos y perjudicando su desarrollo emocional y educativo.
- La ciudadanía en Chile presenta marcadas orientaciones punitivas, baja cohesión y una alta desconfianza social, lo cual se ve amplificado en un contexto de alta percepción de inseguridad, lo que ha tenido como resultado poco interés público en la generación de políticas preventivas. Es urgente adoptar enfoques que contribuyan a prevenir las causas estructurales de la problemática y no el abordaje exclusivo de sus consecuencias.
- El Programa Centros Cívicos por la Paz de Costa Rica constituyen un espacio físico para la prevención de la violencia a nivel barrial y el fortalecimiento del tejido social, promoviendo la participación ciudadana y mejorando las condiciones de vida en barrios críticos. Su foco en la población juvenil, potencia sus capacidades, a la vez de crear una oferta atingente hacia ellos.
- Adoptar este modelo en Chile podría ofrecer una solución integral, entregando seguridad en los barrios, además de ser un nodo institucional en entornos marcados por la vulnerabilidad.

Cómo citar este documento: Elton, M., Carmona, R., Droppelmann, C. & Carvacho, P. (2024). Claves de Política Pública en Seguridad y Justicia: Centros Cívicos por la Paz: Infraestructura comunitaria para la prevención de la violencia y el delito. *Laboratorio Seguridad y Justicia: Innovación en Políticas Públicas*. Centro de Estudios Justicia y Sociedad, Pontificia Universidad Católica de Chile.

ANTECEDENTES Y PROBLEMA DE POLÍTICA PÚBLICA

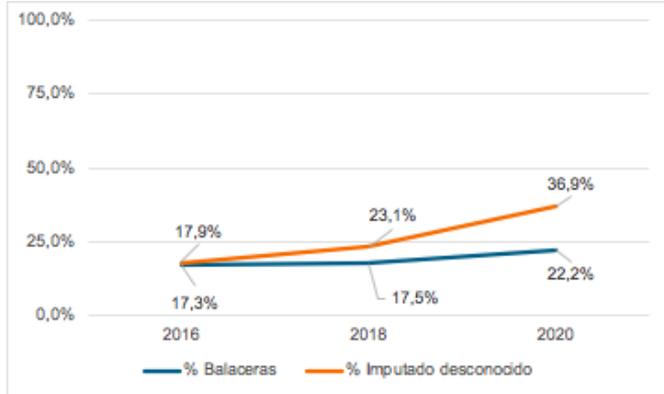
Complejidad criminal

En el último tiempo, la criminalidad en Chile se ha vuelto más compleja. Aunque los delitos menores como hurtos y robos han disminuido, los crímenes graves han aumentado en número y en severidad, volviéndose más violentos y sofisticados. (CEP 2005-2022).

Esto se evidencia a partir del incremento en la

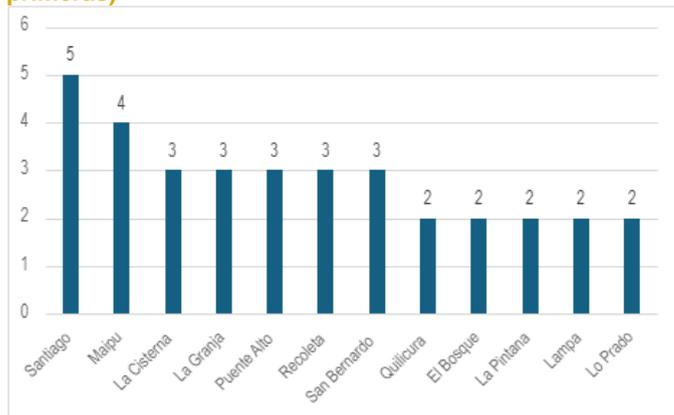
circulación de armas, el auge de los mercados ilegales y el aumento de fenómenos como las balaceras, la oferta de drogas y la duplicación de secuestros extorsivos (Carvacho & Rufs, 2024).

Gráfico 1: Tendencia Balaceras e Imputados desconocidos en Homicidio



Fuente: Elaboración propia a partir de Carvacho & Rufs (2024). Este fenómeno no se distribuye de forma homogénea en el país. Los delitos de mayor connotación están concentrados en la Región Metropolitana RM (a excepción de la zona oriente), Antofagasta y Bio-Bio. Entre fines del 2023 y principios del 2024, los homicidios reportados en la Región Metropolitana se focalizaron en las comunas de Santiago, Maipú, La Cisterna, La Granja, Puente Alto, Recoleta y San Bernardo (Atisba, 2024). Estas zonas que concentran la inseguridad, violencia y delincuencia se denominan “barrios críticos”.

Gráfico 2: Comunas con mayor número de homicidios (15 primeras)

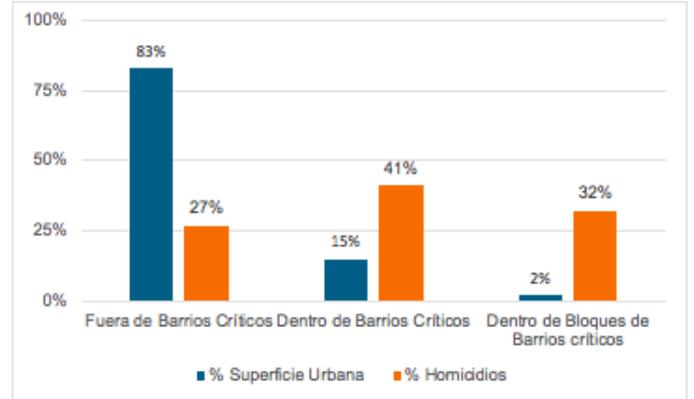


Fuente: Elaboración propia a partir de Atisba (2024)

Seguridad y barrios de alta criticidad

El 41% de los homicidios ocurridos durante el mes de enero 2024, se concentraron en los barrios de alta criticidad (Atisba, 2024)

Gráfico 3: Comparación Superficie Urbana vs Número de Homicidios



Fuente: Elaboración propia a partir de Atisba (2024)

Actualmente, se contabilizan 39 barrios críticos a lo largo del país, caracterizados por altos índices de delitos graves, pero también marcados por la segregación urbana, la falta de acceso a servicios, deficiencias en sus espacios públicos, que contribuyen a su vez, a perpetuar la victimización de sus vecinos con delitos de mayor gravedad (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2023).

Estos barrios acceden de manera desigual a los servicios e infraestructura urbana. En 20 comunas críticas, el 93% declara que existen espacios públicos, pero el 42% dice estar insatisfecho por la calidad de estos espacios, y un 44% les parece insuficiente la calidad de centros de salud (Hurtado, 2020).

Por otro lado, se evidencia una falta de servicios y programas efectivos en estos territorios. Si bien, en muchos contextos se habla de una sobre intervención territorial, un **70%** de la población en barrios críticos declaró no conocer la oferta territorial disponible. En la misma línea, entre quienes conocen la oferta existente, un **31,8%** declaró que los programas ofrecidos actualmente son poco útiles, y **24,6%** señaló que es poca la cantidad. En cuanto a la dotación policial, el **34,2%** de los vecinos de los “barrios críticos” declaró que el control policial es bajo y poco útil para enfrentar sus problemas de inseguridad (Luneke & Varela 2020).

Frente a lo anterior, desde el gobierno se han impulsado y reforzado medidas para hacer frente al problema, promoviendo 33 acciones durante el mandato actual. Dentro de ellas, se puede mencionar “Calles sin Violencia”, ampliando su despliegue en las últimas semanas, como también “Somos Barrio”, el cual se ha modificado con la intención de abordar de manera más integral la problemática de seguridad. Ambas medidas concentran sus esfuerzos, desplegando su acción en los barrios denominados como críticos. Sin embargo, hasta la fecha, a pesar de la disminución de algunos delitos graves (como es el caso de los homicidios -6%- o delitos asociados a armas -2,5%-), el tema de mayor preocupación para el país sigue siendo, y con mayor fuerza la seguridad. Indagar en otras formas de abordaje y prevención, más allá de la presencia policial, toman mayor relevancia en el contexto actual.

Punitivismo y baja cohesión social

La inclinación de la población hacia medidas severas se evidencia en los datos recientes: el 45% de la población apoya la supresión de libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia, y un 56% respalda la reinstauración de la pena de muerte para crímenes graves (CEP, 2023; Bicentenario, 2023). Además, el 48% justifica la tenencia de armas para la defensa personal, y el 28% valora positivamente a líderes con políticas punitivas, como Nayib Bukele (Bicentenario, 2023; Latinobarómetro, 2023).

Paralelamente, la baja cohesión social en Chile empeora la situación actual. Los datos muestran que el 68% de los chilenos no participa en ninguna asociación o grupo, mientras que casi el 60% siente que la sociedad no protegerá sus derechos ni atenderá sus necesidades cuando sea necesario (Encuesta Nacional Bicentenario UC, 2023). La desconfianza interpersonal es alarmante, con un 72% de la población mostrando altos niveles de desconfianza, y el 54% de las personas sólo conoce a un

máximo de cinco vecinos (CEP, 2022; Centro Políticas Públicas UC, 2023; Luneke & Varela, 2020).

La falta de cohesión social alimenta la percepción de inseguridad, lo que a su vez incrementa la demanda de respuestas severas. Asimismo, este enfoque punitivo no aborda las causas subyacentes de la criminalidad y puede ser contraproducente al profundizar la desconfianza y el aislamiento social. Se requiere un cambio de paradigma hacia estrategias que promuevan la seguridad mediante la cohesión social y la prevención.

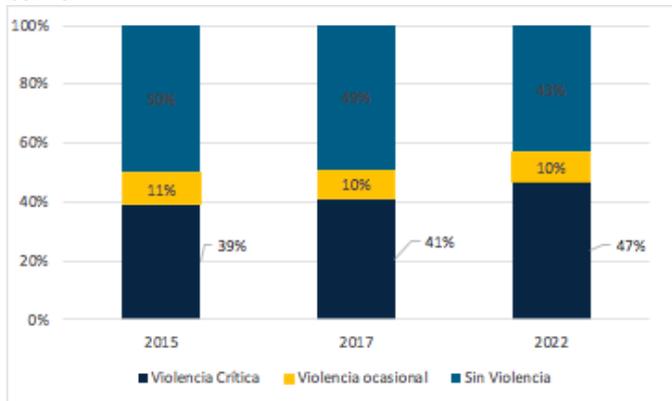
Impacto de la violencia en la Niñez y Juventud

Un grupo mayormente susceptible a la violencia es la niñez y adolescencia. Los datos muestran que esta población está actualmente siendo víctima de violencia familiar, escolar y barrial. Un 62,5% de los padres reportan usar algún método violento de disciplina con niños, niñas de 5 a 12 años (CONANI, 2018; DESUC, 2018). Por otro lado, se evidencia un alza de 480% entre 2016 y 2023 en casos de violencia escolar reportados, y un 28% de las y los jóvenes han vivido violencia física o psicológica en alguna situación de conflicto en la escuela o lugar de estudios en el último año (INJUV, 2022).

Según los datos, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes vive en barrios donde se han presenciado balaceras o disparos (CASEN, 2022). Además, ha aumentado la población infanto-juvenil que vive en barrios con violencia crítica, pasando de un 39% en el 2015 a un 47% en el 2022. ELPI (2022)¹

¹ La encuesta de tipo longitudinal, ejecutada por MDSF para elaborar un seguimiento periódico de una muestra de niños y niñas desde su nacimiento con el propósito de conocer sus trayectorias de vida y los factores relevantes que explican su desarrollo.

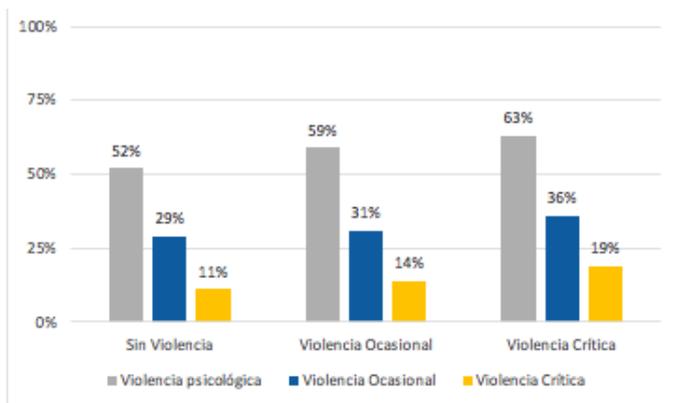
Gráfico 4: Porcentaje de NNA según tipología de violencia barrial



Fuente: Elaboración propia a partir ELPI (2015-2022) en Colunga (2024)²

Asimismo, aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en contextos de barrios críticos, son más susceptibles a recibir un disciplinamiento violento por parte de sus padres. Lo anterior, muestra la reproducción de la violencia en las diferentes esferas.

Gráfico 5: Porcentaje de NNA según tipología de violencia barrial



Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Polivictimización (2022) en Colunga (2024)³

Otro fenómeno que complejiza la situación es el traslape que existe de víctimas y victimario, mostrando que un 96% de adolescentes infractores de ley había experimentado al menos una experiencia adversa en la

niñez, mientras que un 40% experimentó cuatro o más. De esta manera, la violencia es un círculo que se perpetúa, afectando gravemente a la población infanto-juvenil (Valenzuela et al, 2023)

Oferta territorial con enfoque Infanto-Juvenil

En el último año, y en línea con el Plan Nacional NNA 2018-2025, se ha comenzado con la implementación a nivel comunal del programa Compromiso Joven, así como Hablemos de Todo y Chile Crece Más. Estos programas, tienen como fin aumentar la participación infanto-juvenil en los territorios, entregando herramientas de liderazgo e involucrándolos en la implementación de servicios dirigidos a esta población a nivel comunal. Sin embargo, se evidencian deficiencias en los Programas sociales enfocados en NNA.

Como principales problemáticas se identifica una carencia en la transversalización de la oferta, un enfoque principalmente punitivo y una débil articulación entre programas y la intersectorialidad. Sumado a lo anterior, se observa una incongruencia entre los problemas comunales más frecuentes y la capacidad de respuesta de los programas del nivel central (Defensoría de la Niñez, 2020). En relación con la atención a NNAJ, sólo el 20% de los municipios tienen una oficina municipal para atender las necesidades de niños, niñas y adolescentes en sus comunas. En el mismo sentido, a un 27,1% de los municipios le faltan recursos financieros, un 18,7% advirtió insuficiencia de recursos humanos, y un 16%

² Se consideran las siguientes categorías para definir la violencia en barrios: Violencia crítica: Presencia de balaceras y/o peleas siempre/muchas veces. Violencia ocasional: Peleas pocas veces. Sin violencia: No hay peleas ni balaceras

³ Se consideran las siguientes categorías para definir la violencia en barrios: Violencia crítica: Presencia de balaceras y/o peleas siempre/muchas veces. Violencia ocasional: Peleas pocas veces. Sin violencia: No hay peleas ni balaceras

manifestó una precariedad o falta de un espacio físico adecuado para trabajar con esta población (AMUCH, 2019).

EVIDENCIA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Frente a este contexto, se hace evidente la necesidad de generar una oferta programática atinente a las necesidades y oportunidades locales, que además sea atrayente a la población adolescente y juvenil, como grupo de impacto en la prevención. Por otro lado, frente al deterioro de la infraestructura y falta de espacios de uso público en barrios críticos, es necesario pensar en una oferta que brinde lugares de encuentro, y de este modo contribuya a la cohesión social y pertenencia territorial.

Como se expuso, el problema de la violencia en el contexto actual se ve supeditado a diversos factores, y con consecuencias no sólo físicas sobre las personas, sino que, en el plano psicológico, escolar, laboral, y relacional, más aún en los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, se hace necesario un enfoque de prevención integral, que invite a un trabajo intersectorial y multidimensional.

Centros Cívicos por la Paz son espacios físicos que buscan prevenir la violencia y fortalecer a la comunidad en su convivencia y desarrollo.

Los **Centro Cívicos por la Paz (CCP)** corresponden a una iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia y Paz del Gobierno costarricense, en el marco del **Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social**. Este programa nacional es una estrategia de intervención impulsada por el gobierno de Costa Rica en colaboración con

gobiernos locales, con un enfoque participativo comunitario (Ministerio de Justicia y Paz, 2019). Busca constituirse como una respuesta integral y comprometida para abordar los **desafíos persistentes de la violencia y la inseguridad en diversas comunidades**, y está orientado particularmente a adolescentes y jóvenes, priorizando a adolescentes de **edades entre los 13 y los 17 años**. No obstante, también apunta al grupo de niños entre los 7 y los 12 años, e indirectamente, a niños y niñas entre los 0 y 6 años (Ministerio de Justicia y Paz, 2019).

Los CCP se implementan desde el 2015, enfatizando en la necesidad de promover mayor inversión en **programas de infraestructura, articulación** en las políticas de prevención y **focalización local en áreas críticas**, así como en **población joven y en riesgo**.

Se clave está en que son **espacios físicos creados por y para la comunidad**, donde confluyen una serie de servicios basados en una estrategia para la **prevención de la violencia**, el **fortalecimiento de capacidades** de convivencia ciudadana y la **creación de oportunidades de desarrollo** para las personas a través de **la educación, la tecnología, el arte, el deporte y la recreación**. Cada Centro se debe adecuar a su contexto, reconociendo que cada comunidad tiene una historia particular, marcada por diferentes condiciones sociodemográficas y económicas que las hace enfrentar distintas problemáticas.

En una primaria instancia, el modelo se inserta en las comunidades realizando un **mapeo de actores e instituciones** relevantes en cuanto a la prevención comunitaria de la violencia. Así se trabaja colaborando

entre los diferentes organismos en torno a **tres ejes temáticos**:

▪ **Cuidado y autocuidado:** Este eje se enfoca en el desarrollo de actitudes y habilidades que permitan a la población reconocer y enfrentar de manera asertiva situaciones de violencia en diferentes contextos. Para ello, aborda temáticas como, la violencia intrafamiliar, la violencia de género (noviazgo, embarazo en adolescencia), violencia entre pares (*bullying*), violencia asociada a microtráfico de drogas, robo y daño a la propiedad; explotación sexual comercial y discriminación.

▪ **Inclusión social:** pone especial énfasis en la formación técnica de los jóvenes para potenciar el perfil de empleabilidad de la población objetivo del programa. Para esto se proporciona educación (nivelación de estudios y desarrollo de técnicas para estudiar), se trabaja en desarrollo del autoestima e inserción y preparación laboral (empleabilidad, manejo de idiomas, uso de tecnologías) y se fomenta una cultura de emprendimiento y asociatividad.

▪ **Cultura de paz y participación:** Este eje se apoya principalmente en la oferta de servicios de los centros de resolución de conflictos vecinales enfocándose en tres líneas: fomento de la participación ciudadana, resolución de conflictos (a través de servicios de mediación, talleres sobre el manejo de conflictos y la expresión de sentimientos y comunicación asertiva) y acción social.

Para cada eje se desarrollan actividades específicas, de modo que la oferta se puede clasificar en talleres permanentes, talleres sobre temas específicos, actividades y efemérides, entre otros. La realización de los ejes 1 y 3 dependen de cada CCP, sin embargo, para el eje 2 se requieren alianzas multisectoriales con instituciones que comprendan *expertise* en este campo y que sean además afines a cada contexto.

Principales servicios ofrecidos

- **Centros de mediación y resolución pacífica de conflictos:** ofrecen a la comunidad habilidades y herramientas que promuevan el diálogo y los acuerdos
- Espacios para la **recreación** y el deporte sano
- **Programa de gestión de Juventudes para la Paz Social:** busca crear un consejo de personas jóvenes, las cuales se puedan articular y trabajar en conjunto con los diferentes actores involucrados en los CCP
- **Espacios de formación, talleres y actividades socioculturales:** en estos procesos, se busca que las personas jóvenes tengan un alto nivel de incidencia y participación, así como que obtengan herramientas que fortalezcan su liderazgo y autogestión.
- **Sistema Nacional de Educación Musical:** implementa programas especiales de promoción de la música en los CCP.
- **Centro Comunitario Inteligente (CECI):** es una red nacional de laboratorios de computación instalados bajo convenio con los CCP, donde se brindan servicios gratuitos, de manera virtual, presencial y bimodal.
- **Bibliotecas públicas**
- **Centro de cuidado y desarrollo infantil:** ubicado en los CCP y equipado para la atención y cuidado de niños de los 0 meses a los 6 años, en donde reciben alimentación, estimulación temprana y adquieren conocimientos de acuerdo con su edad.
- **Centros de Intervención Temprana (CIT):** espacios donde los niños asisten tres veces a la semana durante tres horas y reciben talleres de artes plásticas, educación, deportes y psicología.
- **Profesores Comunitarios, del Ministerio de Educación Pública:** busca implementar intervenciones sociales, comunitarias y pedagógicas dirigidas a las personas que han sido

excluidas del sistema educativo o están en condiciones de riesgo de serlo para que permanezcan o se reincorporen al proceso escolar.



CCP, La Capri, Costa Rica

Desde su concepción, los Centros Cívicos por la Paz se han establecido en una amplia gama de localidades, desde áreas urbanas densamente pobladas hasta comunidades rurales marginadas. Así, el proceso de determinar los territorios a intervenir mediante esta estrategia considera cuatro indicadores:

1. Zonas que tienen el mayor nivel de concentración de población joven prioritaria para el CCP en la comuna.
2. Comunidades en las cuales se identifica una combinación de vulnerabilidades frente a la violencia hacia la juventud, incluyendo demográficas, socioeconómicas, educativas, delictivas, en salud sexual y reproductiva y otras.
3. Existencia de programas y proyectos de otras instituciones en zonas de vulnerabilidad social y frente a la violencia.
4. Existencia de jóvenes líderes y grupos organizados de la comunidad en zonas de vulnerabilidad social y frente a la violencia

IMPLEMENTACIÓN E IMPACTO

El programa se ha implementado en siete localidades de

Costa Rica, para los cuales se ha destinado una inversión de US\$57.8 millones dirigido a la construcción, equipamiento y operación de los CCP. El proyecto, desde su creación hasta su funcionamiento trasciende varias administraciones gubernamentales (2010-2014, 2014-2018, 2018-2022), valorándose su relevancia e integrándose a las políticas de seguridad, prevención y Planes Nacionales de Desarrollo, como un programa del Estado Costarricense (Ministerio de Justicia y Paz, 2019). El CCP de la localidad de Cartago implicó una Inversión de \$4.8 millones, sus instalaciones ofrecen: Auditorio multiuso, Biblioteca, Centro Comunitario Inteligente (CECI), Casa de Justicia, Oficina de Juventud, Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil (CECUDI), Salones para trabajo colectivo entre jóvenes, espacios para la expresión artística y tecnológica, diálogo comunitario y el fortalecimiento del tejido social. Como población beneficiaria se estimó en un inicio 50 mil personas, pero se proyecta que cada CCP recibe y mantiene como población usuaria a 2.300 niñas, niños y jóvenes.

Anualmente benefician a 12.000 NNJ y sus hallazgos indican:

- Alta eficacia en cuanto a los resultados alcanzados en la población atendida: actores consultados señalan que los CCP han contribuido a la prevención de la violencia primaria y ha potenciado espacios de prevención comunitaria y social.
- Impacto positivo en el fortalecimiento de habilidades interpersonales de los jóvenes, comunicación, liderazgo, identificación de talentos e intereses personales, además de la reducción de factores de riesgo en el consumo de drogas y participación en actividades ilícitas.
- Los CCP representan seguridad y un nodo institucional en medio de las carencias de las comunidades. Se señala que la intervención, representa a la institucionalidad en los

territorios, y una apropiación con el entorno intervenido.

“El Centro ha enviado el mensaje a la población, no solo a la beneficiaria, de que el territorio del CCP es un territorio joven, es un territorio seguro, es un territorio libre de cualquier manifestación de violencia” (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2023, p. 99).

CONCLUSIONES

El diagnóstico nacional da cuenta de la necesidad de generar espacios para la intervención comunitaria donde se aloje la oferta programática y se favorezca la cohesión social. El control territorial y la violencia que deviene del crimen organizado debe contrastarse con acciones comunitarias. En este sentido los CCP son un modelo a seguir, ya que no sólo han mostrado evidencia en el control y prevención de la violencia, sino que poseen pertinencia cultural al haber sido desarrollados en América Latina.

La implementación de los CCP no requiere grandes esfuerzos, más allá de la construcción de una infraestructura de calidad que permita alojar la oferta programática ya existente y articular a las instituciones comunitarias. Sin embargo, se requiere no sólo de voluntad política, sino también de coordinación intersectorial que asegure la presencia del Estado en los territorios más afectados por la violencia y la inseguridad.

BIBLIOGRAFÍA

Asociación de Municipalidad de Chile (AMUCH) (2019). Encuesta Nacional de opinión pública: Las prioridades de los Chilenos y Chilenas frente a las demandas sociales. <https://amuch.cl/encuestas/>

Atisba (2024). Patrones de localización urbana. Homicidios diciembre 2023 – enero 2024 (Reporte

Monitor 1). <https://www.atisba.cl/monitor/patrones-de-localizacion-urbana-homicidios-diciembre-2023-enero-2024/>

Carvacho & Rufs (2024). Serie sobre Criminalidad 2023. Centro Justicia y Sociedad UC.

Centro de Estudio Públicos (CEP) (2022). Encuesta Nacional de Opinión Pública, 2005-2021.

Centros Políticas Públicas UC. (2019). Desafíos en la accesibilidad a áreas verdes en la ciudad y posibles vías de solución, en el marco de la ley de aportes. <https://politicaspUBLICAS.uc.cl/publicacion/desafios-en-la-accesibilidad-a-areas-verdes-en-la-ciudad-y-posibles-vias-de-solucion-en-el-marco-de-la-ley-de-aportes/>

Centro Políticas Públicas. (2023). Resultados Encuesta Bicentenario 2022. Encuesta Bicentenario. <https://politicaspUBLICAS.uc.cl/publicacion/resultados-encuesta-nacional-bicentenario-uc-2022/>

Centro Políticas Públicas. (2024). Resultados Encuesta Bicentenario 2023. Encuesta Bicentenario. <https://encuestabicentenario.uc.cl/publicaciones/resultados-encuesta-bicentenario-2023/>

Colunga (2024): Seguridad en el barrio, niñez, seguridad. (2024, marzo 7). Observatorio de la Niñez. <https://www.observatorioninez.org/temasejes/seguridad-barrio>

Consejo Nacional de la Infancia (CONANI). (2018). Análisis Multivariable de Estudio Polivictimización en Niños, Niñas y Adolescentes. Consejo Nacional de la Infancia. <http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/3535>

Defensoría de la Niñez (2020). Estudio de

identificación de instituciones, programas, evaluaciones e indicadores de la niñez y adolescencia. https://www.defensorianinez.cl/estud_y_estadi/identificacion-de-instituciones-programas-evaluaciones-e-indicadores-de-la-ninez-y-adolescencia/

DESUC. (2018). Principales resultados: «Primera Encuesta Nacional de Polivictimización de Niños, Niñas y Adolescentes».

ENUSC. (2022). 18 Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC, 2021). https://www.pauta.cl/pauta/site/docs/20220803/20220803200450/sintesis_de_resultados_18_enusc_2021.pdf

Hurtado, J. (Julio, 2020). [Presentación] Ciudad a los Ciudadanos. Conferencia Internacional de Ciudades. Santiago, Chile.

INJUV (2022). Décima Encuesta Nacional de Juventudes. Santiago, Chile: Instituto Nacional de la Juventud.

Latinobarómetro, I. (2023). La recesión democrática de América Latina. Santiago: Corporación Latinobarómetro.

Luneke, A., & Varela, F. (2020). Violencia y seguridad en los márgenes urbanos: la respuesta chilena en los vecindarios (2001-2019). *CS*, (32), 43-75.

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2023). Guía de Programas Sociales del Estado de Chile: Programa Somos Barrio (Ex Barrios Prioritarios). Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales. <https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/programas/60339/2023/3>

Ministerio de Desarrollo Social y Familia &

UNICEF (2023). Desarrollo de instrumentos de evaluación. Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia (IV Ronda).

Ministerio de Justicia y Paz. (2019). Modelo Preventivo Centros Cívicos por la Paz. Secretaría Técnica del Programa Nacional de Centros Cívicos por la Paz, Costa Rica.

Subsecretaría de Prevención del Delito. (2017). Primera Encuesta Nacional de Polivictimización en Niñas, Niños y Adolescentes. Presentación de Resultados. Subsecretaría de Prevención del Delito.

Valenzuela, E., Dupré, S., Jara, D., Carvacho, P., Bórquez, I., & Pérez, E. (2023). Estudio sobre medición de población potencial y objetivo de adolescentes infractores de ley para oferta programática de tratamiento. *Centro de Estudios Justicia y Sociedad - UC.* <https://justiciaysociedad.uc.cl/project/estudio-sobre-medicion-de-poblacion-potencial-y-objetivo-de-adolescentes-infractores-de-ley-para-oferta-programatica-de-tratamiento/>